

Señores

Juzgado Catorce (14) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali (V)

Email: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

Asunto: **Contestación A La Demanda.**

Radicación: **76-001-33-33-014-2024-00054-00**

Medio de control: **Reparación Directa.**

Demandante: **Jhon Fredy Bernal Murillo y Otros.**

Demandado: **Nación – Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías - INVIAS y otros.**

Irving Fernando Macías Villarreal, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.413.516 expedida en Ibagué (Tolima), abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional número 216.818 del C.S.J., en calidad de apoderado judicial de la parte demandada **Instituto Nacional de Vías – INVIAS**, de conformidad con el poder original debidamente otorgado por Luis Fernando Pantoja Estrada, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.203.880, quien actúa en su calidad de director territorial Valle (E) de la planta del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, nombrado mediante la Resolución Número 2023 del 16 de junio del 2023, procedo a dar contestación al **MEDIO DE CONTROL** formulado por los demandantes en el siguiente sentido:

I. OPORTUNIDAD.

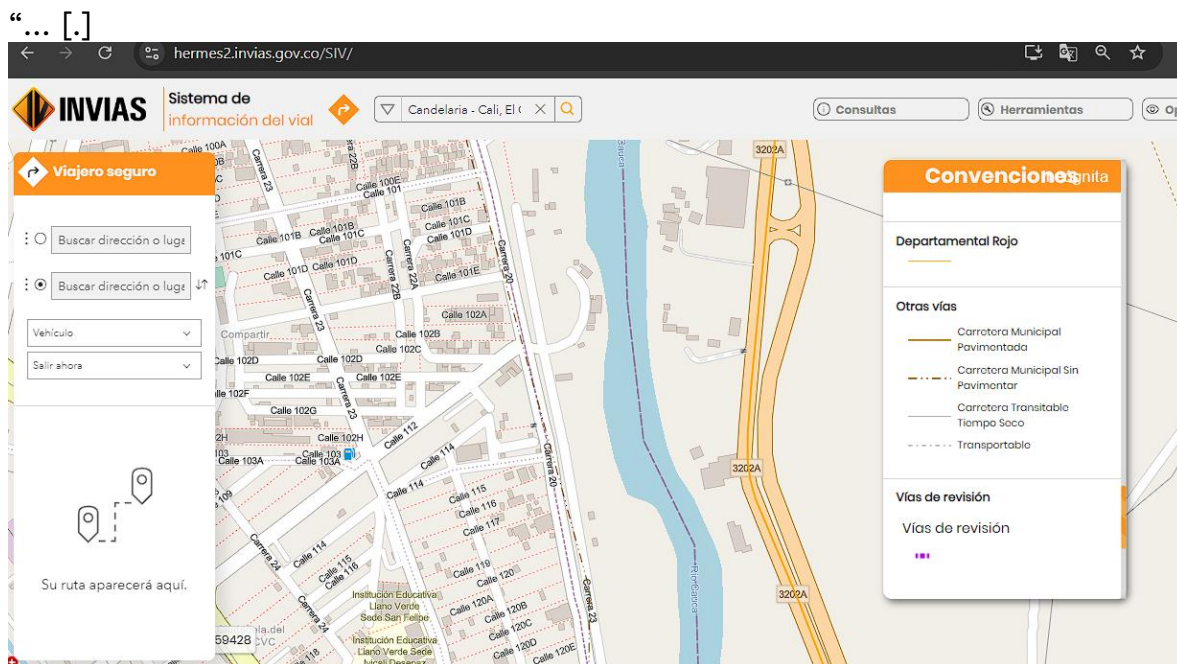
Teniendo en cuenta la fecha de comunicación del Auto Interlocutorio número 375 del 25 de junio del año 2024 que admitió la demanda a través de medios electrónicos surtida el día 2 de agosto del año 2024 y de cara a lo previsto en el Artículo 172 de la Ley 1437 de 2011, cuyos términos se contabilizan conforme se determina en la Ley 2080 de 2021 en su artículo 48, se concluye que el presente escrito se allega dentro del término oportuno dispuesto para tal efecto.

Se procede a realizar pronunciamiento expreso:

II. FRENTE A LOS HECHOS.

Previo a la realización de la manifestación concreta de los hechos planteados en el medio de control ejercido por parte de los demandantes a través de apoderado judicial, es dable exponer preliminarmente que la mayoría de afirmaciones esgrimidas en esta demanda NO LE CONSTAN AL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, derivado de No encontrarse bajo su gobernabilidad la vía en la que presuntamente se materializaron estos, con ocasión a que se encuentra a cargo del departamento del Valle del Cauca.

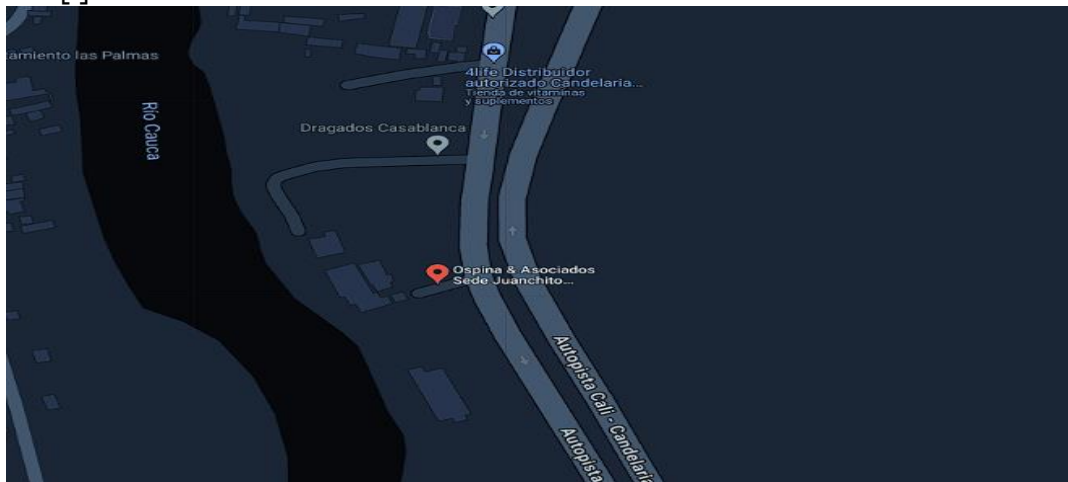
El corredor vial que del municipio de Cali (V) conduce al municipio de Candelaria (V) a la altura del KM 3, tal y como se puede observar en el sistema (https://hermes2.invias.gov.co/Sistema_de_Informacion_Vial/), consultado el día 16 de septiembre del año 2024 y como lo establece la Resolución 5951 del 2015 “*Por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al Departamento del Valle del Cauca*” y el Decreto 1-3-0216 de 2018 “*Por medio del cual se adopta la Red Vial de Competencia Departamental a Cargo del Departamento del Valle del Cauca y de Dictan Otras Disposiciones*”, para la vía de primer orden con número técnico 3202 A “Cali – Candelaria”, corresponde al **Departamento del Valle del Cauca**:



... [.]” (<https://hermes2.invias.gov.co/SIV/>)

En el aplicativo MAPS

([“... \[.\]](https://www.google.com/search?q=Ospina+%26+Asociados+Sede+Juanchito+-+Acabados+para+construcci%C3%B3n+y+remodelaci%C3%B3n+sca_esv=0be386e307b2ca3d&sca_upv=1&tbn=lc&xsrf=ADLYWIJ43pfoSVh-NR7C-cSHVWQEVbDacA%3A1726531836763&ei=_MjoZp3_LN3H4-EPxcTr4As&ved=0ahUKEwid7cmm2MilAxXd4zgGHUXiGrwQ4dUDCAk&uact=5&oq=Ospina+%26+Asociados+Sede+Juanchito+-+Acabados+para+construcci%C3%B3n+y+remodelaci%C3%B3n+gs_lp=Eg1nd3Mtd2l6LWxvY2FsIk9Pc3BpbmEgJiBc29jaWFkb3MgU2VkZSBkdWFuY2hpdG8gLSBBY2FiYWRvcyBwYXJhIGNvbnN0cnVjY2nDs24geSBYZW1vZGVsYWNPw7NuSABQAFgAcAB4AJABAjgBAKABAKoBALgBA8gBAJgCAKACAjgDAJIHAKAHAA&sclient=gws-wiz-local#rlfi=hd::si::mv:[[3.4320753575208762,-76.45471315765462],[3.428102082134238,-76.46219653570402]]]), se puede observar el lugar aproximado del siniestro, que se encuentra acorde con la información del aplicativo HERMES del instituto:</p>
</div>
<div data-bbox=)



... [.]”

Las normas aplicables establecen lo siguiente, miremos:

“... [.]

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Determinar la categoría de las vías correspondientes al Departamento del Valle del Cauca así:

... [.]” (Pág. 2)

“... [.]

3201-1 Km 30 (Borrero Ayerbe) - El Carmen	Vía de Segundo Orden
3202A Cali - Cruce Candelaria	Vía de Primer Orden
3202B Cruce Candelaria - Crucero La Industria	Vía de Segundo Orden

... [.]”

(Resolución 5951 del 2015)

Por lo anterior, tal y como lo refleja en el sistema Hermes 2 del INVIAS, así como la Resolución 5951 del 31 de diciembre del año 2015 y el Decreto 1-3-0216 de 2018, la vía en la que presuntamente se presentó el siniestro vial que ocupa a esta acción, para el 11 de febrero del año 2022 e incluso actualmente, NO está a cargo del INVIAS y se encuentra a cargo de un ente

distinto, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio o capital independiente.

Se procederá entonces a la contestación de los hechos de la demanda por parte de esta entidad demandada sin qué, de las manifestaciones realizadas, se pueda argumentar dilación, evasión y/o silencio alguno, de la siguiente forma:

Sobre Los Hechos: “RESPECTO A LAS CONDICIONES DE TIEMPO MODO Y LUGAR QUE RODEARON EL HECHO”:

Sobre El Hecho 1: “... [.]

El pasado 11 de febrero del año 2022, a eso de las 19:20 horas aproximadamente, el señor JHON FREDY BERNAL MURILLO, mayor de edad, quien se identifica con cedula de ciudadanía No. 94.479.741 expedida en Buga, se desplazaba como conductor de la motocicleta de placas FNS-91D, marca Honda, línea Eco Deluxe ES, color Negro-Verde, por la vía que conecta Cali-Valle del Cauca con Candelaria Valle del Cauca... [.]” (SIC)

No le constan las diversas menciones realizadas por la parte demandante en este hecho al Instituto.

No obra prueba alguna en el proceso que logre acreditar las diversas afirmaciones realizadas, dado que no se aporta al plenario Informe Polícivo de Accidente de Tránsito alguno, que permita una aproximación a las circunstancias de tiempo, modo y lugar del evento dañoso. Deberá probar lo que afirma totalmente la parte demandante y el instituto se atenderá a ello.

Sobre El Hecho 2: “... [.]

El motociclista debido al deterioro de la vía y presencia de huecos en esta y de la falta de señalización de la misma, cae en uno de los huecos por lo que pierde el control de la motocicleta y cae al suelo, siendo posteriormente arrollado por otro vehículo, sufriendo lesiones en su humanidad JHON FREDY BERNAL MURILLO... [.]” (SIC)

No le consta lo expuesto en este punto al INVIAS. No existe ningún tipo de elemento probatorio que permita colegir la veracidad de las diversas afirmaciones expuestas en este punto por parte de los demandantes. Corresponden a afirmaciones que deberán acreditar íntegramente los demandantes a través de la tarifa legal pertinente y el Instituto se atenderá a ello.

Sobre El Hecho 3: “... [.]

De inmediato personas que transitaban por el sitio hicieron el llamado a una Ambulancia la cual trasladado al lesionado a la clínica Urgetrauma San Fernando S.A.S. ... [.]” (SIC)

No le consta al INVIAS lo planteado en este punto, bajo los postulados expuestos. Guarda relación lo mencionado con la atención médica recibida por la víctima directa, conforme la historia clínica allegada al plenario. Los demás aspectos deberán ser acreditados totalmente.

Sobre El Hecho 4: “... [.]

Existen fotografías del lugar de los hechos demostrando el mal estado de la vía, la existencia de huecos en la vía y la falta de señalización de vía pública. ... [.]” (SIC)

No es un hecho. Al parecer corresponde a una calificación probatoria que debe ser realizada en otra etapa procesal; sin embargo, es prudente mencionar que dicho material fotográfico se desconoce por parte del Instituto, en el sentido de no cumplir con los requisitos exigidos jurisprudencialmente para su procedencia, al no contar con la certificación de la persona que las recauda, la identificación sin lugar a duda de la fecha, sitio o lugar que pretende acreditar o registrar, entre otros requisitos necesarios para su ponderación.

Sobre Los Hechos: “RESPECTO A LAS LESIONES QUE SUFRIÓ EL DEMANDANTE – DAÑO”:**Sobre El Hecho 1: “... [.]**

El señor JHON FREDY BERNAL MURILLO como ya se dijo, fue trasladado al Hospital Nuestra Señora de los Santos y posteriormente remitida a la a la clínica Urgetrauma San Fernando S.A.S. donde le diagnosticaron: “Fractura de la rama isqui púbica derecha de pelvis, TEC leve + amnesia del evento + cefalea postraumática + cefalea postraumática, trauma facial + herida, trauma en columna cervical, trauma cerrado toraco abdominal, trauma en dorso + quemadura por fricción GIII, trauma en columna lumbosacra, trauma en hombro derecho + quemadura GII, trauma en codo y antebrazo derecho + quemadura por fricción GIII, trauma en cadera derecha e izquierda, trauma en rodilla izquierda + quemadura por fricción GIII” ... [.]” (SIC)

No le consta lo expuesto al INSTITUTO, debe probarlo íntegramente la parte demandante, a pesar de guardar coherencia con la historia clínica aportada,

el INVIAS no participó en ninguna de los eventos médicos y de atención en urgencias, por lo que se atenderá a lo debidamente probado en la etapa procesal pertinente.

Sobre El Hecho 2 “... [.]

Por el anterior diagnóstico fue intervenido quirúrgicamente en múltiples oportunidades por la severidad de sus lesiones... [.]” (SIC)

No le consta al INVIAS lo manifestado por la parte demandante en este hecho. Debe acreditarlo íntegramente el interesado, tal y como lo exige el artículo 167 del C.G.P., en concordancia con el artículo 306 del C.P.A.C.A.

Sobre El Hecho 3. “... [.]

El día 2 de octubre de 2023, el lesionado es valorado por médico especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, quien realizó dictamen de determinación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional, que arrojó como concepto final del dictamen una pérdida de la capacidad laboral y ocupacional del 36.2.%... [.]” (SIC)

Si bien es cierto obra en el expediente formato de calificación de pérdida de capacidad laboral allegado, el Instituto NO puede aceptar su validez y procedencia probatoria hasta tanto no se permita el ejercicio de contradicción y defensa sobre el mismo, a la luz de los artículos 226 y concordantes del C.G.P., aplicables por remisión expresa del artículo 306 del C.P.A.C.A.

Sobre Los Hechos “RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD DE LA CITADA”:

Sobre Los Hechos 1 y 2: “... [.]

- 1. La causa eficiente del hecho de tránsito se constituye en la falta de mantenimiento de la vía y señalización en la vía por donde transitaba mi prohijada como conductora de una motocicleta, lo que provocaba un hueco sobre esta que no contaba con señalización alguna de peligro y/o precaución que alertara a los usuarios de la vía sobre los baches que existían, Por tanto, se concretó una omisión por parte de las entidades convocadas en el deber de efectuar el mantenimiento y la señalización mínima a la vía. Ahora bien, las entidades convocadas tenían un deber de perpetrar las reparaciones de la carretera, lo cual incluye reparar los huecos que en ésta se encontraban, de conformidad con la obligación impuesta a ellas de asegurar el mantenimiento de la vía con el fin de que dicha vía pudiera funcionar adecuadamente y que*

no constituyera un peligro para todo aquel que la transitara, lo cual constituye una falla en el servicio por parte del estado. ... [.]” (SIC)

2. La existencia del nexo causal entre lo ocurrido y la responsabilidad de las convocadas nace en la obligación impuesta para mantener las vías en óptimo estado para que de manera que esta no se conviertan en un riesgo inminente para los usuarios de la vía, como efectivamente aconteció, y el principio de señalización y mantenimiento de la vía, que ni siquiera admite cumplimiento parcial, como quiera que su finalidad, consistente en garantizar la circulación por las vías públicas en condiciones de seguridad, libertad y confianza, y sólo se previene con eficiencia si la existencia de trabajos, peligros y obstáculos sobre la vía, se encuentra debidamente señalizados, de conformidad con los requerimientos técnicos establecidos al respecto, que en el presente caso no ocurrió, tal omisión compromete la responsabilidad de las convocadas, como quiera que es esta quien tiene la obligación señalización de la vía, no obstante omitió dichos deberes, falencias que se erigen como la causa determinante en la producción del daño antijurídico por cuya indemnización se demandara en caso de no haber conciliación y en consecuencia, genera para ellos la consiguiente obligación de repararlo... [.]” (SIC)

Estos “Hechos” son expuestos de manera antitécnica, se generan acumulaciones fácticas e inclusión de aspectos subjetivos, apreciaciones de índole jurídico no susceptibles de aceptación o rechazo.

Sobre las afirmaciones fácticas expuestas, el INVIAS manifiesta que No le constan, dado que No están probadas en este asunto. Sobre las apreciaciones, posiciones y planteamientos jurídicos, el INVIAS expone que, al no corresponder a hechos, no son susceptibles de pronunciamiento alguno y corresponden a particularidades a ponderar en la etapa judicial pertinente, finalidad última de este litigio.

Sobre Los Hechos “RESPECTO A LOS PERJUICIOS CAUSADOS”:

Sobre El Hecho 1. “... [.]”

El daño que se imputa a las entidades convocadas se produce por las lesiones de JHON FREDY BERNAL MURILLO, que trajo consigo unos perjuicios morales materializados en la aflicción, la tristeza, la depresión, la zozobra, la angustia y temor que generó en esta, insuceso que rompió su tranquilidad y felicidad la de su grupo familiar, compuesto por su cónyuge JOSE JULIAN ZULUAGA HERNANDEZ, quien sufrió un grado de

afectación moral con las lesiones de su pareja y también con el proceso de recuperación, recordemos que fue sometido a intervenciones quirúrgicas, por lo que el lesionado tuvo que pasar por situaciones bochornosas, difíciles, entristecedoras, dolorosas que afecta su esfera personal y su grupo familiar, generándose unos perjuicios morales objeto de resarcimiento. ... [.]” (SIC)

No le consta lo expuesto al Instituto Nacional de Vías – INVIAS en este hecho. Debe acreditar íntegramente la parte demandante lo expuesto.

Sobre El Hecho 2. “... [.]

El ciudadano JHON FREDY BERNAL MURILLO al momento del accidente contaba con 40 años de edad y se encontraba laborando en una fábrica transportadora de alimentos, donde devengaba un salario mínimo legal mensual vigente; debido a las lesiones sufridas se produjo una pérdida en su capacidad laboral del 36.2% por tanto debe ser indemnizada por la esta injusta perdida y que se ve reflejada en un lucro cesante tanto consolidado como futuro. ... [.]” (SIC)

No le constan al INVIAS estas afirmaciones. Deberá probarlo la parte demandante, ante la ausencia total de material probatorio que permita soportar su dicho.

Sobre El Hecho 3: “... [.]

El señor JHON FREDY BERNAL MURILLO debido a las lesiones sufrió una alteración en su unidad corporal, recordemos que sufrió múltiples fracturas que generaron perdida de la capacidad laboral, por lo que deberá ser indemnizado por el daño a la salud que recibió. ... [.]” (SIC)

No le consta nada de lo planteado en este punto al INVIAS. Se atenderá a lo probado el Instituto en el curso procesal; dentro de dicho análisis judicial, se encontrará la posición subjetiva de imputación que realiza la parte actora en este hecho, la cual NO se acepta.

Sobre El Hecho 4: “... [.] *El daño sufrido es inconstitucional e ilegal y ha causado y sigue causando a mis poderdantes serios daños tanto patrimoniales, como extra patrimoniales razones por la cual se busca conciliar su resarcimiento... [.]” (SIC)*

No es un hecho propiamente dicho. Lo plasmado en la parte inicial de este punto, corresponde a una valoración subjetiva y calificación jurídica no susceptible de pronunciamiento como hecho por parte del Instituto. No le

consta al instituto la presunta continuidad de diversos daños a los demandantes, deberán acreditarlos íntegramente.

Expuesta la contestación expresa a los hechos de la demanda, se pasa a plantear lo siguiente:

III. FRENTE A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS.

De entrada, se plantea la oposición a todas y cada una de las pretensiones de la parte actora, tanto las declarativas como las de condena, porque como quedará demostrado en el discurrir de esta contestación de la demanda, no existe relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre el hecho generador del daño originado y las acciones u omisiones que se pretender imputar al Instituto Nacional de Vías - INVIAS; por cuanto, la evidencia allegada con la demanda carece de poder de convicción y entidad para demostrar la responsabilidad administrativa y patrimonial a la precitada entidad.

Deberá considerarse en este asunto particular que, la aplicación del título de imputación en estos casos del desarrollo de actividades peligrosas como lo es la conducción de vehículo motocicleta, se analizará a través del denominado título de Falla del Servicio Probada (*consejero ponente: RAMIRO SAAVEDRA BECERRA Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil seis (2006) Radicación número: 20001-23-31-000-1998-02939-01; 20001-23-31- 000-1997-03334-01 / 14694*).

El estudio referido a la ejecución de la actividad de conducción en casos como el que nos ocupa, permite exigir el análisis del cumplimiento de los postulados de diligencia, cuidado, pericia y respeto normativo en su desarrollo y a cargo de quien despliega la acción de conducción; y, va de la mano con el estudio del cumplimiento de las normas de tránsito exigibles tanto para la circulación del vehículo conforme las normas técnicas (*Seguro Obligatorio, Revisión Técnica y Mecánica*), así como las referidas a los cumplimientos legales y reglamentarios a cargo del conductor (*Velocidad Máxima Permitida, Licencia de tránsito, licencia de conducción, elementos como casco, chaleco, etc.*).

Por el contrario, realizado el análisis de las pruebas que se acompañan al libelo, se logra evidenciar únicamente, que la víctima directa sufrió lesiones; sin embargo, no existe ningún elemento probatorio que describa con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar del evento causa y mucho menos que estas se hayan ocasionado bajo las premisas

esgrimidas en los hechos de esta acción y con el alcance que pretende otorgársele.

No existe relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre el hecho generador del daño y que el mismo le sea imputable al instituto, conforme la clara configuración de la Falta de Legitimación en la Causa Por Pasiva, dado que la vía en la que presuntamente aconteció el hecho, no se encontraba bajo la gobernabilidad del INVIAS; así como, existir una evidente carencia de suficiencia de elementos que logren establecerla.

Por el contrario, logra observarse una clara ausencia de nexo causal, ausencia de elementos probatorios, e inexistencia de falla del Servicio que le sea imputable.

A. SE REALIZA RECHAZO EXPRESO A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA:

De conformidad con las pretensiones expuestas en el escrito de demanda por parte de los accionantes, se expone lo siguiente:

Sobre los Perjuicios Morales e Inmateriales Solicitados: Es importante precisar que, el presente análisis no constituye aceptación de estimación o tasación alguna, respecto de los perjuicios morales e inmateriales solicitados.

Puntualizado lo anterior, es dable manifestar al despacho que la pretensión respecto de estos en la acción desborda el límite establecido jurisprudencialmente. Se están solicitando perjuicios morales en una cuantía de 60 SMMLV para cada uno de los demandantes, sin que exista un soporte objetivo válido para esgrimir tal pretensión, aspecto que permite solicitar su negativa; o de ser el caso, su ajuste a lo definido jurisprudencialmente, muy inferior al aquí pretendido.

En igual sentido se plantea el denominado DAÑO A LA SALUD, del cual se eleva pretensión por 60 S.M.M.L.V.

Así que, sin admitir su procedencia, los mismos, en su justa proporción para la imputación que se pretende, deben respetar los lineamientos señalados por el Honorable Consejo de Estado al respecto y conforme a su intensidad, entre otros. (*Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 27001233100020090017701 (41517), Sep. 17/18.*)

Sin entrar a reconocer su viabilidad tenemos que mencionar y recordar que, **los Límites De Condena Establecidos Por el C.E., son Límites, Pero No Predeterminaciones:** Se debe dejar claro que, la indicaciones jurisprudenciales de límites máximos de reconocimiento de perjuicios por muerte y lesiones no constituyen determinación o reconocimiento automático en los porcentajes máximos en ellas indicados; por el contrario, significan rangos límites a través de los cuales el juez de instancia debe moverse (*De 0 a 100, de 0 a 50, de 0 a 35, etc.*), en atención a la valoración puntual de demostración de la cercanía, aflicción, dolor.

Se debe recordar para este caso que, las características del daño son: Que sea cierto, presente o futuro; determinado o determinable y anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida, que no se trate de situaciones jurídicas indeterminadas, ilegítimas o contrarias a la Constitución y la ley.

Así que, pese a que se indica la generación de perjuicio material en su modalidad de Lucro Cesante consolidado y futuro, no existen elementos probatorios que permitan inferir su real causación.

Esta liquidación antes relacionada, en su modalidad de lucro cesante consolidado y futuro realizadas por la parte demandante, no cuenta con ningún tipo de soporte probatorio que permita inferir su causación.

Por lo tanto, deberán negarse las pretensiones indemnizatorias elevadas en las sumas pretendidas.

IV. FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES.

En lo referente a la responsabilidad administrativa del Estado por daños causados a particulares, la jurisprudencia tradicionalmente adoptada exige la presencia de tres (3) elementos esenciales, a saber:

- Un daño causado a un bien jurídicamente tutelado;
- Una falla en el servicio por acción u omisión, retardo o irregularidad en su prestación; y
- El **Nexo Causal** existente entre el daño y el hecho, imputable a través de la falla en la prestación del servicio.

Las entidades demandadas podrán exonerarse de responsabilidad alegando y probando los elementos constitutivos de Fuerza Mayor, Caso

Fortuito, Hecho Exclusivo de la Víctima y/o el Hecho Determinante de Un Tercero.

De igual manera, en los casos como el que nos ocupa, la falla del servicio como título subjetivo de imputación, debe ser acreditada íntegramente y, tal y como ocurre aquí, la ausencia de su configuración resultará en la inexistencia de responsabilidad.

El problema de la responsabilidad del Estado debe resolverse con base en lo prescrito en el artículo 90 de la carta política, el cual prevé cuándo será el Estado responsable patrimonialmente por daños antijurídicos, norma que dispone:

“... [...] ARTÍCULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas ... [...]”

En sentencia proferida por el Consejo de Estado, Subsección C, Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de fecha 5 de octubre del año 2011, se indica sobre el artículo precedente lo siguiente:

“... [...] La responsabilidad del Estado consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, se fundamenta en dos elementos, a saber: El daño antijurídico y, ii) la imputación del mismo a una autoridad en sentido lato o genérico...”

“Y es así, como la jurisprudencia de esta corporación lo ha entendido, diciendo lo siguiente:

“porque a términos del artículo 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo Estado o a una persona jurídica de derecho público.

“La objetivación del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión”.

“Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño, por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de este, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento.

“Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es la existencia del daño

puesto que, si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.

... [.]

“Son dos las condiciones indispensables para la procedencia de la declaración de la responsabilidad patrimonial con cargo del Estado y demás personas jurídicas de derecho público, a saber, el daño antijurídico y la imputabilidad del daño a alguna de ellas.

“La noción de daño antijurídico es invariable cualquiera que sea la clase contractual o extracontractual o el régimen de responsabilidad de que se trate; consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar... [.]”

De allí que el elemento indispensable, aunque no siempre suficiente para la imputación, es el nexo causal entre el hecho causante del daño y el daño mismo, de modo que este sea el efecto del primero.

En este entendimiento, la imputación del daño al Estado depende, en este caso, de que su causación obedezca a la acción o a la omisión de las autoridades en desarrollo del servicio público o en nexo con él, excluyendo la conducta personal del servidor público que, sin conexión con el servicio, causa un daño.

Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad, esto es, el daño antijurídico y la imputabilidad de este al Estado.

A. RAZONES DE DEFENSA EN EL CASO PARTICULAR.

El aspecto fundamental para dirimir este asunto será el análisis que se haga frente al nexo de causalidad, elemento de vital importancia dentro de los requisitos que se exigen para que surja la responsabilidad civil extracontractual. Como su nombre lo indica, el nexo de causalidad es la relación, el vínculo, que debe existir entre el hecho y el correspondiente daño. Si no hay nexo causal no surge la responsabilidad civil.

Para adoptar cualquier decisión en este caso con fundamento en las pruebas aportadas al proceso, es indispensable que el operador jurídico se encuentre convencido por ellas, que se encuentre en estado de certeza sobre los hechos que estas declaran.

Si las pruebas no alcanzan a producir esa convicción, porque no existen elementos para alcanzar certeza, situación que no permite despejar

completamente la duda razonable, no podrá apoyarse en aquellas para resolver el fallador.

La parte actora tiene la carga de la prueba de lo que afirma; es decir, probar todos y cada uno de los presupuestos fácticos puestos de presente en el escrito de demanda y particularmente aquellos con los cuales se pretende enrostrar la responsabilidad de mi prohiada.

Sobre el tema, en ponencia del consejero, doctor Carlos Betancourt Jaramillo, Expediente 10327, se dijo:

"... [...] Por la actividad peligrosa ejercitada tanto por la administración como por los particulares, debe acudirse a la falla probada del servicio según la cual quien debe sacar adelante sus pretensiones está en la obligación de demostrar que el demandado fue el causante del daño. ... [...]".

Vista la anterior jurisprudencia, se puede establecer que no existe prueba idónea que sea suficiente para acreditar dentro del proceso la responsabilidad del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y la presunta falla del servicio que se le imputa en la demanda a su cargo.

De los preceptos antes transcritos, se infiere el principio dispositivo que rige nuestro ordenamiento procesal, el que significa que corresponde a la parte actora probar los hechos y pretensiones de la demanda; es decir, lo que se conoce como principio “*ONUS PROBANDI*”, el cual indica que por regla general corresponde a cada parte acreditar los hechos que invoca, tanto los que sirven de base para la demanda como los que deben soportar las pretensiones indemnizatorias, de tal manera que les corresponde asumir las consecuencias negativas en caso de no hacerlo.

En este evento, se formula medio de control de reparación directa, como resultado de los daños que fueron generados tras la presunta ocurrencia de un siniestro vial en la fecha indicada en la demanda, esto es para el 20 de septiembre del año 2021.

Este siniestro, presuntamente ocasionó lesiones personales graves a la víctima directa, al señor JHON FREDY BERNAL MURILLO quien fungía como conductor del vehículo motocicleta.

Al intentar realizar un análisis de las presuntas circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que aconteció el siniestro vial, encontramos que NO SE GENERÓ I.P.A.T. alguno, que permitiera dar cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del evento, así como la hipótesis de este.

Se pretende allegar al plenario un documento que pretende establecer la causa del siniestro; pero, de este, por el contrario, se logra identificar un registro fotográfico que da cuenta de una imperfección en la vía, sin lograr identificar sin duda alguna que para la época de los hechos esta existiera en la vía, o de existir, con las características reflejadas 6 meses después del evento.

Adicional a ello, su presencia en la vía es a la altura de la MITAD DE LA VÍA., en un corredor vial de dos carriles en sentidos contrarios. Significa entonces ello que, el conductor transitaba por la mitad del carril, desconociendo su obligación normativa de conducir al lado derecho.

Desde el punto de vista de la acreditación de los elementos de la responsabilidad, enfocados en la claridad de la causa adecuada del hecho dañoso, patente es la falta de elemento o medio de prueba que permita acreditar con certeza, en el presente asunto, que el accidente de tránsito haya ocurrido y que este, se presentara en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que aduce la parte demandante y no otros.

Es más, de la misma documentación allegada por la parte demandante, historia clínica obrante en el cuaderno principal, se puede deducir que, si se desplazaba en su calidad de conductor del vehículo motocicleta, transitaba sin el autocuidado necesario, sin el respeto normativo y reglamentario por los siguientes puntos que podemos plantear:

1. Las lesiones padecidas por la víctima, conforme la descripción allegada, es evidente que se presentan como resultado del despliegue de altas velocidades y; en muchas ocasiones, sin la ejecución de actividades de protección y cuidado.
2. Por otro lado, y de cara a la imputación, tenemos en este caso que, la vía en la que ocurrió el accidente de tránsito **NO SE ENCONTRABA** para la época de los hechos, **NI SE ENCUENTRA ACTUALMENTE**, bajo la gobernabilidad del Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

Se reitera, el corredor vial 3202 A de primer orden, a la altura del km 3, corresponde a una carretera a cargo del Departamento del Valle del Cauca.

La vía con número técnico 3202 A, que tal y como lo establece la Resolución 5951 del 2015 *“Por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al Departamento del Valle del Cauca”* y el Decreto 1-3-0216 de 2018 *“Por medio del cual se adopta la Red Vial de Competencia Departamental a Cargo del Departamento del Valle del Cauca y de Dictan*

Otras Disposiciones”, se encuentra a cargo de entidad territorial antes mencionada, miremos:

“... [.]

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Determinar la categoría de las vías correspondientes al Departamento del Valle del Cauca así:

... [.]” (Pág. 2)

“... [.]

3201-1 Km 30 (Borrero Ayerbe) - El Carmen	Vía de Segundo Orden
3202A Cali - Cruce Candelaria	Vía de Primer Orden
3202B Cruce Candelaria - Crucero La Industria	Vía de Segundo Orden

... [.]”

(Resolución 5951 del 2015)

El Decreto 1-3-0216 de 2018 “*Por medio del cual se adopta la Red Vial de Competencia Departamental a Cargo del Departamento del Valle del Cauca y de Dictan Otras Disposiciones*”, refrenda la competencia en cabeza del Departamento del Valle del Cauca.

Por lo anterior, tal y como lo refleja en el sistema Hermes 2 del INVIAS, ya citado, así como la Resolución 5951 del 31 de diciembre del año 2015 y el derecho 1-3-0216 del 2018, la vía en la que presuntamente se presentó el siniestro vial que ocupa a esta acción, NO está a cargo del INVIAS y se encuentra a cargo de un ente distinto, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio o capital independiente.

Los anteriores argumentos nos permiten esgrimir los siguientes:

B. MEDIOS EXCEPTIVOS PROPUESTOS.

Además de todas aquellas, que de conformidad con el artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo encuentre probadas su honorable despacho, las que para el efecto señale en concordancia el C.G.P., se proponen las siguientes:

B.1. LA EXCEPCIÓN PERENTORIA NOMINADA FALTA MANIFIESTA DE LEGITIMACIÓN MATERIAL Y SUSTANTIVA EN LA CAUSA POR PASIVA.

Teniendo en cuenta la característica de esta excepción, se propone tal y como lo establece el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, reformado por la ley 2080 de 2021.

La reforma realizada al C.P.A.C.A., en la Ley 2080 de 2021, nos permite determinar las excepciones previas y perentorias, así como su trámite.

Las excepciones perentorias tienen relación directa con las pretensiones de la demanda, ya que se constituyen como herramientas de defensa que atacan específicamente la solicitud judicial que propone la parte actora de la litis; y en ese sentido, controvierten de fondo la reclamación perseguida. Se pueden clasificar estas excepciones perentorias en nominadas e innominadas. Estas nominadas son aquellos medios de defensa que una vez configurados generan la negativa de las pretensiones de la demanda, convirtiéndose en presupuestos materiales para una sentencia favorable.

Para este caso, la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, conciliación, **la falta manifiesta de legitimación en la causa** y la prescripción extintiva. (Art. 175 parágrafo 2 del C.P.A.C.A)

Así las cosas, de manera respetuosa se solicita la desvinculación de una de las partes llamadas al mismo, es decir este Instituto Nacional de Vías – INVIAS por configurarse la excepción nominada perentoria denominada **falta manifiesta de legitimación en la causa por pasiva**, aplicable al presente proceso.

Esta solicitud se eleva teniendo en cuenta que la etapa procesal para decidir las excepciones previas, es donde se convalida y donde prima el principio de preclusión del proceso y de desvinculación de las partes, cuando exista prueba de que la entidad demandada no es a la que corresponde la obligación funcional y; a pesar de la vinculación de hecho por considerarlo así la parte demandante, el juez del proceso en la audiencia inicial tiene la facultad de desvincularlo, en especial cuando con fundamento legal está acreditado.

Al respecto tenemos que, el Instituto Nacional de Vías inició labores el primero de enero de 1994 mediante el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, creándose un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Transporte, con objetivo de “*ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de La Nación*”; asumiendo nuevas funciones y cambiando su estructura interna con los Decretos número 2056 y 2067 del 24 de julio de 2003.

Como organismo adscrito al Ministerio de Transporte, el Instituto pertenece a la Rama Ejecutiva y tiene como objeto la ejecución de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura **no**

concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.

Tal y como se plantea, NO EXISTE omisión alguna del INVIAS en este caso, dado que se acredita suficientemente en esta instancia, **que la vía lugar del hecho, no se encuentra bajo la gobernabilidad, no se encuentra a cargo del Instituto.**

De allí que, no existe omisión alguno en el ejercicio de sus facultades legales, tal y como lo regulan el Decreto Extraordinario No. 1171 del 30 de diciembre de 1992, por el cual se reestructuró el Fondo Vial Nacional como el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, que estableció las funciones de esta Entidad en relación con las carreteras nacionales, así como lo regulado en el Acuerdo No. 018 de 27 de julio de 2000 *“Por el cual se adoptan los estatutos internos del Instituto Nacional de Vías”* y el Decreto 2618 de noviembre 20 de 2013 *“por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y se determinan las funciones de sus dependencias”*.

Como se ha citado extensamente, al Instituto Nacional De Vías – INVIAS le corresponde velar por la preservación y perfecto estado de las obras a su cargo, entendiéndose concretamente, las vías, puentes, muros y las demás obras de carácter NACIONAL complementarias NO CONCESIONADAS, necesarias para la conservación del bien de uso público encomendado y acorde a las disposiciones legales vigentes; **pero aquellas que se encuentren a su cargo o bajo su gobernabilidad.**

Es decir, por ningún motivo está dentro de su resorte y competencia el responder por hechos, acciones u omisiones que generen efectos contrarios a terceros, provocados por otros intervinientes.

El INVIAS, conforme lo expuesto, NO TENÍA para la época de los hechos la gobernabilidad de la vía en la que presuntamente aconteció el hecho dañoso que aluden los demandantes produjeron los perjuicios peticionados.

Los anteriores argumentos nos permiten emplear los siguientes esbozos, miremos:

B.1.1. DE LA CLARA COMPETENCIA LEGAL Y CONVENCIONAL EN CABEZA DE OTRA ENTIDAD CON PERSONERÍA JURÍDICA, PATRIMONIO, DIFERENTE AL INVIAS.

El tramo correspondiente a la vía de primer orden, identificada con el número técnico 3202 A “*Calí – Cruce Candelaria (V)*”, conforme el Decreto 1-3-0216 de 2018 “*Por medio del cual se adopta la Red Vial de Competencia Departamental a Cargo del Departamento del Valle del Cauca y de Dictan Otras Disposiciones*”, son vías a cargo y bajo la gobernabilidad del Departamento del Valle del Cauca y conforme también como lo dispone la Resolución número 5951 del 2015.

Para este caso, no corresponde a competencia funcional lo endilgado al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, por corresponder a aspectos derivados del cumplimiento y/u omisión de las obligaciones de mantenimiento y señalización de una carretera a cargo del ente territorial con patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y representación legal totalmente ajenas e independientes al Instituto.

Lo pretendido claramente en esta demanda, conforme los hechos y el desarrollo de imputación que se pretende y desprende del texto mismo, se encuentra encaminado a la asignación de responsabilidad por la entidad que tenía a su cargo el **mantenimiento, conservación, atención** de la vía, y está, no correspondía a la entidad que represento.

El Consejo de Estado ha manifestado respecto a la falta de legitimación en la causa lo siguiente: **consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012) Radicación: 76001-23-25-000-1997-03056-01 (22.032)**

“... [.] En la verificación de los presupuestos procesales materiales o de fondo, dentro de los cuales se encuentra la legitimación en la causa, compete a la Sala analizar la legitimidad para obrar dentro del proceso de la parte demandada y su interés jurídico, pues la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o a las demandadas⁸.”

Con relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, en sentido amplio, la jurisprudencia constitucional se ha referido a ella, como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”,⁹ de forma tal, que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas¹⁰.”

Entendido así el concepto de legitimación en la causa, es evidente que cuando ella falte, bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria, sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada.

*Ahora bien, también ha sostenido la Sala que la legitimación en la causa **puede ser de hecho** cuando la relación se establece entre las partes por razón de la pretensión procesal, es decir, de la atribución de una conducta que el demandante hace al demandado en su demanda, o **material** frente a la participación real de las personas en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que dichas personas hayan demandado o hayan sido demandadas, por lo cual la ausencia de esta clase de legitimación, no constituye una excepción de fondo porque no enerva la pretensión procesal en su contenido, sino que es una condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito, sin que el estar legitimado en la causa otorgue el derecho a ganar, lo que sucede aquí es que si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto, no porque él haya probado un hecho que enerve el contenido material de las pretensiones, sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo – no el procesal –; si la falta de legitimación en la causa es del demandado al demandante se le negarán las pretensiones, no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho, sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder, y, por eso, el demandado debe ser absuelto.¹²”... [.]”*

PETICIÓN ESPECIAL.

Su señoría, la entidad que represento no tiene vínculo causal, ni jurídico, ni compartido, ni solidario por los hechos que acaecieron a la Litis, muy respetuosamente se le solicita que, se decida su desvinculación, **como consecuencia de la procedencia de la FALTA MANIFIESTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, de manera anticipada en la sentencia respectiva.**

Ahora, si el despacho considera que cuenta con legitimación en la causa material y sustancial para comparecer como parte demandada en este trámite, se proceda a analizar la excepción de Falta De Legitimación En La Causa Por Pasiva en sentencia como excepción de mérito, así como los siguientes planteamientos:

B.2. INEXISTENCIA DE FALLA DEL SERVICIO IMPUTABLE AL INVIAS.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido consistente en reclamar para la prosperidad de las acciones de reparación directa, la demostración de tres elementos y; que todo lo atinente a su comprobación, está en cabeza del actor, tal como lo ha reconocido el Consejo de Estado al establecer en Sentencia con número 85001 23 31 000 1993 00074 01 (14170) de sección 3 de 24 de febrero de 2005 con magistrado ponente Dr. RAMIRO SAAVEDRA BECERRA:

“... [...] falla del servicio, dentro del cual la responsabilidad surge a partir de la comprobación de la existencia de tres elementos fundamentales: el daño antijurídico sufrido por el interesado, el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada, y finalmente, una relación de causalidad entre este último y el primero, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio... por lo cual quien alegaba haber sufrido un daño producido por una actuación u omisión imputable a determinada entidad..., soportaba la carga de probar los tres extremos mencionados... [...]”

El Tribunal Contencioso Administrativo en profusa jurisprudencia, al respecto de la aplicación del título de imputación de Falla del Servicio Probada, ha indicado:

“... [...] La Sala de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido, en nuestro derecho, y continúa siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete – por principio- una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual... [...]” (Sentencia del 23 de mayo de 1994- Exp. 7616)

Es importante dejar claro que, para acreditar la presunta responsabilidad del estado por la falta de conservación y mantenimiento de una vía, a través de la cual se genera un accidente de tránsito y perjuicios a terceros como consecuencias de sus presuntas omisiones y/o acciones, es indispensable demostrar además del DAÑO generado, la presunta FALLA en el servicio consistente en el hipotético desconocimiento de los deberes de la administración y que estas puedan ser calificadas como conductas anormalmente deficientes, no cualquier tipo de falla.

También se ha argumentado que el mandato que impone la Constitución Política de Colombia, referido a que las autoridades de la República tienen el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades “... [.] ***debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera...*** [.]”. (CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION A, consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011) Radicación número: 66001-23-31-000-1998-00496-01(22745) Actor: LIGIA PEREZ VARGAS Y OTROS Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y OTRO)

Esto nos lleva a plantear también que:

B.2.1. EXISTE UN INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO PROCESAL “ONUS PROBANDI INCUMBIT ACTOR”.

Es de vieja data conocido qué, le compete a la parte demandante probar ante el juez las imputaciones de contenido obligacional que le atribuye al demandado, o a los demandados; en otras palabras, no se trata de probar precisamente las obligaciones, sino los hechos en virtud de los cuales se alega el derecho, en atención de la máxima jurídica “*ius ex facto oritur*”, el derecho alegado debe nacer de los hechos.

Con esta orientación, el Código Civil en su artículo 1757 recoge lo siguiente:

“... [.] *Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta...*”, mucho más recientemente encontramos en el C.G.P., en su artículo 167 “carga de la prueba”, lo siguiente: “... *Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen...* [.]”.

Ahora, frente a la carga de la prueba en casos de posibles fallas en el servicio, actualmente se plantea que ésta no debe entrar a presumirse, en consideración a que la falla presunta del servicio como título de imputación no tiene aplicabilidad alguna actualmente, máxime cuando la carga probatoria normativamente se encuentra delimitada legalmente y a través

de la norma especial, en los artículos 167 del C.G.P. y normas concordantes aplicables, sin consideración de presunción legal alguna.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia 4 de febrero de 2010, rad. 7000112331000199505072-01 (17720), en esta sentencia se aborda el asunto de la carga de la prueba en los siguientes términos:

“... [.] La referida norma legal que desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el juez de lo Contencioso Administrativo, en que quién pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al pago que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales se basa sus excepciones o su estrategia de defensa.

Si aquel no cumple con el “onus probandi”, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su “causa petendi”, si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conducirá a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, un fallo adverso de sus intereses.

Los planteamientos expuestos son, entonces, los que han de ilustrar el proceder del juez ante la falta o la insuficiencia de los elementos demostrativos de los hechos que constituyen el “tema probandum” del proceso – es decir, aquellos respecto de los cuales se predica la necesidad de su demostración–, pues la autoridad judicial, en cualquier caso, no puede declinar su responsabilidad de resolver el fondo del asunto, de suerte que las anotadas reglas de la carga de la prueba indicarán si procede despachar favorablemente las pretensiones del actor o, por el contrario, si lo que se impone es acceder a la oposición formulada por la parte demandante... [.]”

De conformidad con lo anterior, de la documentación allegada con la demanda, se configura un serio cuestionamiento en torno a que el accidente de tránsito ocurriera bajo las circunstancias fácticas aseveradas y no por otros factores exógenos, como el incumplimiento normativo en cabeza de la víctima directa, como lo son el exceso de la velocidad permitida en la zona, invadir el carril contrario, la no adopción de las

medidas de cuidado y preventivas al abordar las curvas, todo ello de cara a las lesiones que se afirman fueron resultado del evento.

Por otro lado, no se observa aspecto fáctico y/o jurídico alguno que permita inferir un ligamen o relación de contenido obligacional funcional del INVIAS, conforme las imputaciones de índole omisivo en esta demanda. No tiene la obligación el Instituto de mantener, conservar, señalizar, la vía en la que ocurrió supuestamente el siniestro vial.

El precedente argumento exceptivo, encuentra ligamen con el siguiente, y que se considera estructurado como:

B.3. INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE EL HECHO GENERADOR DEL DAÑO, EL DAÑO Y LAS OBLIGACIONES IMPUTADAS AL INVIAS.

En materia de responsabilidad estatal, es fundamental acreditar el nexo causal entre el daño alegado y la actuación y/u omisión de la entidad estatal llamada a juicio.

El problema en la relación de causalidad surge a partir de la premisa lógica de que no está llamado a resarcir un daño aquel que no ha contribuido a su realización; de manera que, siempre debe existir un ligamen entre el daño causado y el hecho que se atribuye a quien debe responder.

Dicha relación se ha denominado desde otrora Nexo Causal, y se constituye como un aspecto fundamental que debe ser probado en todos los procesos surtidos, para efectos de lograr la consolidación de la responsabilidad en cabeza de cualquier entidad, bien sea con características objetiva y/o subjetiva.

Sobre este particular podemos rememorar al honorable Consejo de Estado que ha expuesto:

“... [.] la idea de la causalidad surge a partir del concepto de causa que en la noción más elemental se asocia con los componentes de anterioridad y necesidad, los cuales al confluir se traducen en que una cosa ocurre después de otra, de suerte que sin la primera la segunda no podría haber sucedido, o lo que es lo mismo, al remover la primera la segunda desaparecería. Desde el punto de vista filosófico el principio de causalidad se erige como una formulación del principio de la razón suficiente aplicado en relación con la existencia de las cosas, dejando de lado la razón de ser de la cosa misma como objeto del conocimiento, para señalar que todo lo

que pasa obedece a una razón, es decir, nada pasa “porque sí” o sin que tenga alguna explicación, de manera que la existencia de un fenómeno debe su razón de ser a la existencia de otro. Lo anteriormente señalado permite afirmar que la relación de causalidad en términos jurídico es el vínculo o ligamen existente entre dos fenómenos diversos (entre el hecho y el daño) en virtud del cual el segundo debe la existencia al primero y en ese sentido el segundo de los fenómenos se ubica como el efecto jurídico del primero, es por ello que la relación de causalidad constituye el nexo etiológico material- en cuanto dice relación a la parte objetiva-, que liga un fenómeno a otro y, que, en relación con el daño, constituye el factor de imputación material o física (imputatio facti) del mismo a un sujeto determinado. Es decir, cuando se hace alusión a la imputación material se remite al contexto de la relación de causalidad para determinar a quién es atribuible materialmente la producción del daño, en tanto la imputación jurídica consiste en determinar el fundamento o la razón de la obligación indemnizatoria acorde con uno de los títulos de imputación que han sido decantados por la jurisprudencia y la doctrina, según se trate de supuestos que se ubican dentro de una noción (subjetiva u objetiva) de la responsabilidad y por consiguiente, se sitúa en ese plano dentro de la estructura lógica del fenómeno de la responsabilidad. El problema fundamental que se suscita frente a la estructuración del nexo causal surge a partir de la existencia de distintas condiciones que preceden a la producción del daño, de manera que se dificulta establecer cuál o cuáles constituyeron la causa del fenómeno o cuáles de las concausas han contribuido realmente a la relación del daño... [.]” (Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia 9 de junio de 2001, Radicado 13001233100019950011601 (18078) consejera Ponente: Gladys Agudelo Ordoñez.)

Como bien se expresa en la anterior línea jurisprudencial, existe la necesidad de una conexión directa entre el nexo causal, el daño alegado y la entidad llamada a juicio para atender la reparación invocada.

No se configura respecto del INVIAS, debido a que no se logra demostrar de ninguna forma, a través de cual acción u omisión influyó directamente en la generación del hecho y el daño presuntamente irrogado, lo que derrumba la constitución de una “*falla del servicio*” que le sea imputable.

En este sentido, tenemos que el Honorable Consejo de Estado ha sido sucinto en establecer que, para que exista la posibilidad de imputar responsabilidad del estado por los daños sufridos, es indispensable demostrar fehacientemente las deficiencias u omisiones, la falla en el servicio consistente en la omisión por parte de la administración en el

cumplimiento de sus funciones; de allí es claro que, debe existir correspondencia entre las funciones a cargo y las presuntas obligaciones omitidas, conforme los hechos de la demanda.

Por el contrario, en este evento existe acreditación de que la infraestructura vial se encontraba para el momento del siniestro a cargo del Departamento del Valle y con ello su gobernabilidad.

En este orden de ideas, tenemos que no existe soporte probatorio alguno que permita colegir responsabilidad de mi representada de cara a los hechos, daños y obligaciones normativas presuntamente infringidas en el Medio de Control adelantado.

B.3.1. EXISTE UN ROMPIMIENTO DEL NEXO CAUSAL O LA AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD.

En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada, fue anormalmente deficiente, situación que no ocurre en esta demanda.

Para determinar entonces si se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración, hecho que no acontece en esta acción; y que, por el contrario, se logra desvirtuar para con el INVIAS al demostrarse que la gobernabilidad de la vía, de manera material y jurídica, se encontraba en cabeza de entidad diferente a la entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución número 5941 de 2015.

Ahora, no se ha demostrado bajo ningún elemento de convicción que, la vía en la que se menciona aconteció el siniestro vial No estuviera señalizada, carga incumplida por parte de la parte demandante.

Sumado esto, es sabido que la aplicación correcta de este conjunto de conceptos, en el juzgamiento de daños inferidos por el mal funcionamiento del servicio, exige de ciertas puntualizaciones; pues no es verdad, como muchos piensan, que para obtener la indemnización por parte del Estado siempre le basta al reclamante comprobar la omisión del servicio, su retardo o su prestación deficiente.

El consejo de estado de tiempo atrás ha definido como presupuestos para la declaratoria de la responsabilidad del estado, encontrando la necesidad de acreditar lo siguiente:

“... [...] d) una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización... [...]” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 28 de octubre de 1976, consejero Ponente, Doctor Jorge Valencia Arango.)

Con el mismo sentido argumentativo tenemos:

“... [...] la constatación de la ocurrencia de un incumplimiento omisivo al contenido obligacional impuesto normativamente a la Administración, en primer término y, en segundo lugar, la relación causal adecuada entre dicha omisión y la producción del daño, ... [...]”

...

Ahora bien, considera esta sala que, tratándose de la responsabilidad por omisión, establecido el daño, el análisis debe conducirse hacia la determinación de la causalidad y la imputabilidad, aplicando para el primer cado, obviamente, la teoría de la causalidad adecuada. En ese sentido, el problema radicaría en establecer, inicialmente, si existía la posibilidad efectiva para la entidad demandada de evitar el daño, interrumpiendo el proceso causal. Y el análisis de la imputación, que será posterior, se referirá a la existencia del deber de interponerse, actuando – situación en la que la obligación de indemnizar surgirá del incumplimiento, como comportamiento ilícito... [...]” (CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de 2002, consejero Ponente: Doctor ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, expediente: 05001-23-31-000-1993-0621-01(12789); Actor: Argemiro de Jesús Giraldo Arias y otros.)

Deberá entonces, en concordancia con lo antes referido, la parte actora acreditar, con la carga probatoria definida legalmente (Art. 167 C.G.P.) completa y adecuadamente lo que afirma, respecto de las presuntas omisiones funcionales y legales en torno a la ausencia de señalización en la vía y que esta se constituyera la causa eficiente del hecho, en cabeza de cualquiera de las entidades demandadas.

Ahora, desde un análisis probatorio de este asunto, se observa una clara:

B.3.1. INEXISTENCIA DE ACREDITACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR DEL SINIESTRO VIAL.

Tal y como se ha mencionado en este evento ni siquiera se aporta un informe policivo de accidente de tránsito – I.P.A.T. que permita tener un planteamiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del siniestro.

Debiéndose, claro está, abordar probatoriamente dicho informe I.P.A.T., no como un informe pericial, sino un mero informe descriptivo; requiriéndose el agotamiento de unos criterios para su evaluación expresamente contenidos en la Resolución 11268 de 2012 y a través del trámite conforme lo dispuesto tanto en las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como por remisión expresa a las contenidas en el Código General del Proceso, para este tipo de prueba.

Se aporta al plenario un documento al que se le pretende dar la calidad de un informe pericial, pero que, se surte pasados 6 meses después de ocurrido el siniestro; además, del mismo se observa la presencia de una imperfección EN LA MITAD DE LA VÍA, sin poder de manera alguna, determinar que guardara identidad con la existente en la fecha de los hechos, o que existiera para ese momento.

Es claro entonces que, dicho informe o dictamen debe ser controvertido con el agotamiento de unos criterios para su evaluación expresamente contenidos en las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y por remisión expresa a las contenidas en el Código General del Proceso artículos 224 y concordantes.

Está probado que ninguna de las personas que elaboraron la documentación que pretende acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, presenciaron el siniestro vial; dado que acudieron a la escena con una temporalidad muy superior a la del evento.

Es claro, con la información existente en el expediente, sin entrar a admitir su validez como necesidad del requerimiento de comprobación probatoria ejercido a través del derecho de contradicción que, No Existe Claridad respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del Siniestro Vial y que la presunta y no acreditada falta de señalización o estado de la vía, correspondiera a la causa eficiente y determinante del siniestro vial.

B.4. CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD EL HECHO DE LA VÍCTIMA – (INCUMPLIMIENTO DEL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO A SU CARGO)

Tal y como se ha mencionado y confesado incluso con la demanda misma, se observa que la parte demandante tenía conocimiento previo de la existencia de obras en la vía.

Esta simple pero clara circunstancia permite inferir que el despliegue de la actividad de la conducción por parte de este ciudadano, no se ejecutó bajo los postulados normativos establecidos legalmente para ello.

El código de tránsito ley 769 de 2002, establece en el evento de la presencia de elementos o circunstancias que puedan incidir en la ejecución de la conducción, de actitudes preventivas y de cuidado, como lo es la reducción de la velocidad al momento de abordar las curvas. En igual sentido que, desplazarse por el lado derecho de las vías al conducir vehículos motocicleta.

Con las aproximaciones jurídicas del acápite anterior, tenemos que el hecho exclusivo de la víctima está constituido como la violación por parte de ésta, de las obligaciones a la cuales está sujeta.

Las actuaciones imprudentes, negligentes, voluntarias de la víctima, constituyen los factores determinantes en la producción del daño, esto es el accidente de tránsito en sí mismo; se deduce claramente que no respetó las normas de tránsito estipuladas a nivel legal en el Código de Tránsito respectivo, disposición normativa de obligatorio conocimiento para todos y cada uno de los conductores y pasajeros de vehículos en el país, derivado del ejercicio de una actividad peligrosa como lo es la conducción de vehículos automotores.

Por lo anterior, se insiste, la hoy víctima directa desde una óptica de causalidad material, conforme lo define el código de tránsito nacional, debía transitar por el lado derecho del carril que ocupaba, a la velocidad permitida al abordar curva y no lo hacía, ello es evidente de las lesiones padecidas. Desconoció entonces lo regulado en el artículo 55 de la ley 769 de 2002, miremos:

*“... [.] **ARTÍCULO 55. COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR, PASAJERO O PEATÓN. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las***

indicaciones que les den las autoridades de tránsito. ... [.]” (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

De lo anterior se logra decantar que, la víctima directa del accidente de tránsito transgredió su deber objetivo de cuidado al no prever, desde un punto de vista lógico y racional, que transitar por la mitad de la vía, excediendo el límite de velocidad, se constituyó un factor de riesgo que decidió asumir bajo su cuenta.

Lo anterior significa claramente que, de desplegar la víctima la actividad peligrosa de manera prudente, diligente, respetando las normas de tránsito, no se habría consolidado el hecho dañoso.

B.3.2. La Actividad De La Conducción Requiere De Conocimiento Y Pericia.

Conducir es un procedimiento complejo, en el que de no atenderse en debida forma los requerimientos legales y reglamentarios, se pone en alto riesgo la vida de quien ejecuta dicha actividad peligrosa y la de terceros.

El conducir “*bien*”, es entendido, en los términos de seguridad vial, como un ejercicio de respetar las indicaciones y/o señales de tránsito, ser prudente y cumplir con todas las normas; en igual sentido es importantísimo la relación del conductor con el vehículo, verificación del estado mecánico del mismo, los reflejos, experiencia, precisión, prudencia, entre otros.

Los conductores a menudo transitan con exceso de confianza y hacen parte de su actividad cotidiana, “*malos hábitos*” para conducir que desarrollaron durante muchos años, máxime en zonas rurales y/o con baja densidad vehicular.

El conocimiento de las normas y señales de tránsito, así como de la vía por la cual se conduce, hacen parte del entorno que inexorablemente debe conocer de cara a la confianza y prudencia con la que transite por la misma. Dicha pericia, unida a diversas competencias emocionales personales y sociales hacen parte de la consolidación de un conductor prudente, dentro de lo humanamente posible.

Las habilidades para ejecutar las maniobras básicas de manejar, tales como arrancar, parar, hacer virajes, adelantar, cambiar de velocidades, controlar la velocidad del vehículo de cara al abordaje de curvas, se adquieren a través del adiestramiento adecuado, además de práctica.

Ahora bien, acerca de la prudencia que debe acompañar a los conductores de vehículos automotores de dos ruedas, el Honorable Consejo de Estado (*Sala, Sección Tercera, Exp. Número 17.1855 (R-2237)* C.P. Myriam Guerrero Escobar, 19 de agosto 2009, ha realizado el siguiente planteamiento:

“... [...] Debe recordarse que los usuarios de las vías, bien como peatones ora como conductores, están en la obligación de extremar al máximo las medidas de seguridad, independientemente de que una norma les imponga dicha exigencia, pues la conducción de vehículos automotores es considerada una actividad peligrosa, lo cual implica asumir riesgos cuando se hace partícipe de ella, pero dicha obligación tiene la connotación de ser mucho más exigente para los motociclistas, por su estado total de indefensión, a tal punto que en los eventos en los que estos resultan involucrados en un accidente, siempre llevan la peor parte... [...]”

B.6. EXCEPCIÓN GENÉRICA E INNOMINADA.

Sin perjuicio de las excepciones propuestas y con fundamento en lo contemplado en los artículos 306 del C.P.A.C.A. y 282 del C.G.P., comedidamente solicito a su despacho se decida en la sentencia a proferir, sobre las excepciones que encuentre probadas.

Se realiza pronunciamiento con relación a las pruebas de la siguiente manera:

C. OPOSICIÓN EXPRESA A LOS PERJUICIOS Y SU LIQUIDACIÓN.

Como se mencionó líneas atrás, encontramos que en este caso no existe elemento probatorio alguno que logre permitir una liquidación de perjuicios, tal y como fue elevada o se pretende por la parte demandante en esta acción.

En este sentido, no existe elemento probatorio, válida y jurídicamente hablando, que permita establecer:

1. El ingreso real percibido por la víctima directa.
2. Incluso, si dicho ingreso existía o no.
3. La configuración de perjuicios inmateriales para muchas de los sujetos procesales, y la razón o argumento de su tasación en el porcentaje máximo definido jurisprudencialmente.

D. OPOSICIÓN AL MATERIAL PROBATORIO APORTADO.

El artículo 168 del C. G. del P. dispone: “... [.] *RECHAZO DE PLANO. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles...* [.]”

D.1. DE LOS DOCUMENTOS ALLEGADOS EN EL ACÁPITE “ANEXOS” CON LA DEMANDA.

Se aporta una relación fotográfica sin acreditación alguna de la fecha, quien tomó la misma y la identificación de sus integrantes. Lo anterior, dado que este álbum fotográfico no puede ser valorado y no deben ser tenidos en cuenta para acreditar los supuestos fácticos de la petición indemnizatoria de la parte actora, ya que su falta de ratificación al interior de este proceso les priva de cualquier valor demostrativo.

El material fotográfico se encuentra enlistado dentro de las denominadas pruebas documentales y tenemos que solo reviste un carácter representativo que muestra un hecho distinto a él mismo.

Es por esto por lo que, estas fotografías por sí mismas, no acreditan que la imagen capturada corresponda a los hechos que pretenden acreditarse, ya que no cuentan con suficiencia para confirmar la realidad de los que se le deducen o atribuyen y no otros diferentes, en concordancia con las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Deberán entonces revestir certeza dichos elementos, para que tengan la connotación probatoria y puedan valorarse conforme las reglas de la sana crítica, identificando claramente la persona quien las realizó, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron tomadas. (*Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 05001233100020030399301 (44494), de febrero 15 de 2018, consejero ponente Dr. Ramiro Pazos.*)

Estas imágenes allegadas, no cumplen las exigencias normativas y jurisprudenciales para ser adoptadas como tales y mucho menos, con la connotación probatoria que se les pretende endilgar con el documento allegado.

D.2.1. FACULTAD PARA CONTRAINTERROGAR A LOS TESTIGOS QUE SE DECRETEN EN EL PROCESO POR LOS DEMANDANTES Y DEMÁS SUJETOS PROCESALES.

En el evento de proceder al decreto de las pruebas testimoniales solicitadas, tal y como lo faculta el artículo 221 del C.G.P., con aplicación de remisión expresa contemplada en el artículo 306 del C.P.A.C.A., respecto de la práctica de las pruebas testimoniales, se solicita señor juez respetuosamente, autorización para el interrogatorio y contrainterrogatorio a los testigos peticionados por la parte demandante, de ser decretados, especialmente con las facultades contempladas en el artículo 4 de dicha disposición.

D.3. PRUEBAS SOLICITADAS CON ESTA CONTESTACIÓN Y ANEXOS ALLEGADOS.

D.3.1. DOCUMENTALES APORTADAS.

- Poder para actuar.
- Documento Llamamiento en Garantía Aseguradora Mapfre.
- Póliza Mapfre Responsabilidad Civil Extracontractual.
- Certificado de Existencia y Representación Mapfre.
- Documentos que acreditan representación DT Valle INVIAS.
- Documentos apoderado judicial.

D.3.2. INTERROGATORIO DE PARTE.

De conformidad, y en el contexto de lo reglado en el artículo 198 del C.G.P., tenemos que el interrogatorio de parte es un medio de prueba que se dirige a quien ocupa en el proceso adelantado calidad de parte, bien sea esta una persona natural, como ocurre con los demandantes, o una persona jurídica, como ocurre con los representantes legales de las entidades llamadas en garantía (*artículo 66 inciso 2 del C.G.P.*), por ello, se elevan las siguientes peticiones:

- Señor Juez, solicito de manera comedida decrete y practique en la hora y fecha que tenga usted a bien señalar, citando a todos los demandantes **mayores de edad a la fecha de la diligencia**, con la finalidad de que rindan el interrogatorio de parte, relacionado **con los hechos de esta demanda, sus pretensiones, los**

documentos allegados como prueba con la demanda y con las contestaciones, entre otros aspectos de interés para este asunto, que en sobre cerrado allegaré en fecha anterior a la diligencia programada, reservándome la posibilidad de formularlo oralmente el día de la diligencia misma.

- Admitido el llamamiento en garantía, sírvase citar y hacer comparecer a los señores representantes legales de las entidades llamadas en garantía, quienes hagan sus veces al momento de la diligencia realizada, para que rindan el interrogatorio de parte que se formulará en sobre cerrado y/o en el momento de la diligencia misma, y manifiesten lo que les conste respecto de los hechos expuestos en la demanda, así como de los elementos que constituyen el llamado en garantía realizado, el contrato de seguro, sus alcances, los amparos, coberturas, coaseguros, entre otros.

D.3.3. SOLICITUD RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DECLARATIVOS APORTADOS AL PROCESO.

De manera respetuosa, se solicita citar y hacer comparecer en la fecha y hora que determine su despacho, con las finalidades de ratificación documental establecidas en el artículo 262 del C.G.P., aplicable por remisión expresa del artículo 306 del C.P.A.C.A., con los alcances de interrogar sobre los aspectos fácticos expuestos en sus declaraciones, a las siguientes personas que rindieron declaraciones extrajudicial obrantes en el proceso:

- Ratificación del documento denominado “*11. Entrevistas técnico criminalístico*”, en el que se reflejan las declaraciones de los señores: DIANA MARÍA MONTOYA LONDOÑO, WALTER ANDRÉS JIMENEZ BENITEZ, DIANA MARCELA CAJIAO PANTOJA, JHON FREDY BERNAL MURILLO.

D.3.4. CONTRADICCIÓN INFORMES “PERICIALES”.

De manera comedida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 226 y concordantes del C.G.P., aplicables por remisión expresa contemplada en el artículo 306 del C.P.A.C.A., se solicita NO SE TENGAN en cuenta como dictámenes periciales, los documentos allegados al proceso denominados Álbum Fotográfico Técnico Criminalístico; Investigación Judicial para la

Defensa de Víctimas y Dictamen de Determinación de Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional, por no cumplir estrictamente con los requisitos contemplados en la norma referida, para tenerlos como tales.

No cuentan los documentos allegados a los cuales se les pretende dar el alcance de dictámenes periciales, con los requisitos establecidos en el artículo 226, numerales 4, 5, 6, 9, 10, ausencia de conclusiones, entre otros.

Por lo anterior, y en concordancia con el artículo 228 del C.G.P., se solicita lo siguiente:

- Se cite y haga comparecer en la fecha y hora determinada por su honorable despacho, al señor INVESTIGADOR CRIMINALÍSTICO Y ADMINISTRATIVO JUDICIAL, RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ VIVAS, con la finalidad de que sustente sus informes (álbum fotográfico técnico criminalístico – Investigación Judicial para la Defensa de Víctimas), conforme lo establecen los artículos 226 y concordantes aplicables del C.G.P. y C.P.A.C.A.
- Se cite y haga comparecer en la fecha y hora determinada por su honorable despacho, al señor INVESTIGADOR CRIMINALÍSTICO Y ADMINISTRATIVO JUDICIAL, RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ VIVAS, con la finalidad de que sustente su informe, conforme lo establecen los artículos 226 y concordantes aplicables del C.G.P. y C.P.A.C.A.
- Se cite y haga comparecer en la fecha y hora determinada por su honorable despacho, al señor INVESTIGADOS CRIMINALÍSTICO Y ADMINISTRATIVO JUDICIAL, RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ VIVAS, con la finalidad de que sustente su informe, conforme lo establecen los artículos 226 y concordantes aplicables del C.G.P. y C.P.A.C.A.

V. PETICIÓN DEL INVIAS

Teniendo en cuenta lo expuesto en la contestación, así como de las pruebas arrimadas al proceso, los medios exceptivos propuestos, encarecidamente solicito se sirva NEGAR TODAS y cada una de las pretensiones de la demanda elevadas en contra del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**, dado que no se encuentran configurados los elementos que se requieren para la declaración de responsabilidad de la entidad y;

por el contrario, se encuentran acreditadas las excepciones y eximentes propuestos a su favor.

Para lo anterior, deberá el despacho efectuar las siguientes o similares declaraciones:

1. Declarar probadas las excepciones y eximentes propuestos, bien sea en su calidad de previas, mixtas y/o de fondo.
2. Declarar la desvinculación del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, del presente asunto bien sea a través de sentencia anticipada o la decisión de fondo.
3. Denegar las pretensiones de la demanda.
4. Condenar en costas a la parte demandante.

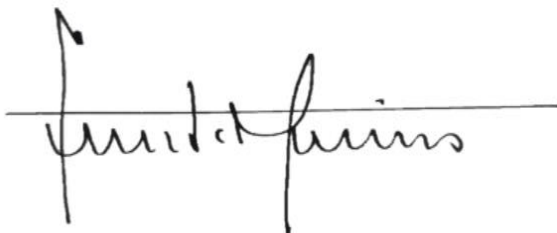
Solicito respetuosamente, reconocermé personería para actuar en este proceso, en calidad de apoderado judicial de la parte demandada Instituto Nacional de Vías – INVIAS, conforme las facultades concedidas en el poder allegado adjunto con este escrito.

VI. NOTIFICACIONES.

Las notificaciones judiciales se recibirán en el correo electrónico: njudiciales@invias.gov.co, dispuesto para tal fin por el INVIAS.

Y, de manera concomitante, también a las siguientes direcciones de correo electrónico: imacias@invias.gov.co, e irv.mac.vil@gmail.com en mi calidad de apoderado judicial, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 2º de la Ley 2213 de 2022 y en el Acuerdo PCSJA20-11581 de 27 de junio de 2020. C.S.J.

Agradezco la atención prestada.



IRVING FERNANDO MACÍAS VILLARREAL
C.C. No. 93.413.516 Expedida en Ibagué (T)
T.P. No. 216.818 del Consejo Superior de la Judicatura.
Telf.: 3127378511 / 3187053658